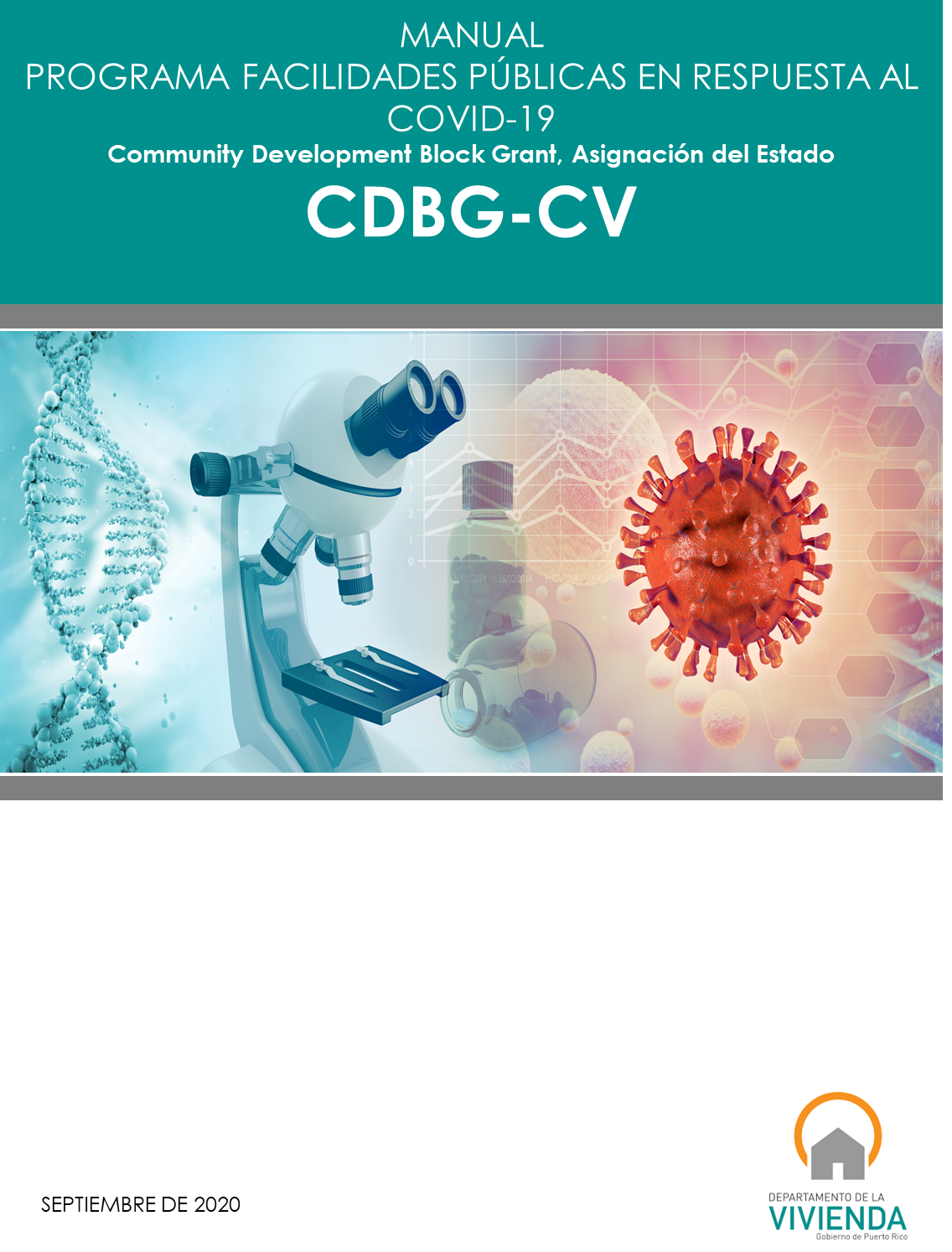
****A close up of a logo

Description automatically generated

**ENMIENDAS AL MANUAL**

Este Manual está sujeto a cambio, de acuerdo con la reglamentación que publique el Departamento Federal de la Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés), para efectos del uso de los fondos CDBG-CV, y las políticas que promulgue el DVPR, en virtud de estos. Las enmiendas al manual serán publicadas por el Departamento y se registrarán en la tabla que sigue.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NÚMERO DE VERSIÓN**  **DEL MANUAL** | **FECHA** | **DESCRIPCIÓN BREVE**  **DE LA ENMIENDA** |
| Versión 1 | 10-no.-2020 | Versión original del manual. |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**TABLA DE Contenido**

[INTRODUCCIÓN 5](#_Toc55898996)

[PROPÓSITO 6](#_Toc55898997)

[LEYES, REGLAMENTOS Y NORMAS APLICABLES 7](#_Toc55898998)

[DEFINICIONES 7](#_Toc55898999)

[RESPONSABILIDADES DEL DVPR 8](#_Toc55899000)

[ACCIONES Y RESPONSABILIDADES A NIVEL DEL MUNICIPIO 9](#_Toc55899001)

[DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 10](#_Toc55899002)

[ACTIVIDADES, USOS ELEGIBLES Y OBJETIVO NACIONAL 11](#_Toc55899003)

[CUMPLIMIENTO CON OBJETIVO NACIONAL 13](#_Toc55899004)

[CONSIDERACIONES EN PROYECTOS QUE IMPLICAN CONSTRUCCIÓN 15](#_Toc55899005)

[PAGOS AL CONTRATISTA 18](#_Toc55899006)

[PROCESO DE REQUISICIÓN DE FONDOS 20](#_Toc55899007)

[PROHIBICIÓN DE DUPLICIDAD DE BENEFICIOS 21](#_Toc55899008)

[INGRESO DE PROGRAMA 22](#_Toc55899009)

[REQUISITOS DE DOCUMENTACIÓN Y MANEJO DE EXPEDIENTES 22](#_Toc55899010)

[MONITORÍA 23](#_Toc55899011)

[PROCESO GENERAL DE MONITORÍA 23](#_Toc55899012)

[ANEJOS 25](#_Toc55899013)

[CERTIFICACION CUMPLIMIENTO CON NORMAS Y REGULACIONES EN LOS MANUALES (FORMULARIO DV-CV-FP-001) 26](#_Toc55899014)

[HOJA GUÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE ÁREA DE SERVICIO/BENEFICIO (FORMULARIO DV-CV-FP-002) 27](#_Toc55899015)

[AUTO-CERTIFICACIÓN (FORMULARIO DV-CV-FP-003) 29](#_Toc55899016)

[2 C.F.R. § 200.326 AND 2 C.F.R. PART 200, APPENDIX II, REQUIRED CONTRACT CLAUSES 30](#_Toc55899017)

# Introducción

El 27 de marzo de 2020, el Gobierno de los Estados Unidos promulgó la Ley Pública 116-13, Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por el Coronavirus (Ley CARES/CARES, por sus siglas en inglés), para enfrentar los efectos de la pandemia de COVID-19.

Dentro de las asignaciones de la Ley CARES se aprobaron $5,000 millones en fondos correspondientes al Programa Community Development Block Grant (en adelante, **CDBG-CV**), para ser distribuidos por el Departamento Federal de la Vivienda y Desarrollo Urbano (**HUD**, por sus siglas en inglés), entre las jurisdicciones elegibles. Esto para prevenir, prepararse y responder al coronavirus o COVID-19.

Como parte de los procesos de distribución de estos fondos, el Gobierno de Puerto Rico ha recibido tres asignaciones una asignación de **$14,024,199.00** para ser distribuidos a los municipios non-entitlement[[1]](#footnote-1), **$11,613,814.00** para ser distribuidos a los municipios non-entitlement y entitlement[[2]](#footnote-2) y una tercera asignación de **$7,540,908** para ser distribuida a los municipios non-entitlement. Estas asignaciones de fondos CDBG-CV para Puerto Rico serán manejadas por el Departamento de la Vivienda de Puerto Rico (DVPR).



Acceda la información de las asignaciones en el siguiente enlace:

<https://www.hud.gov/program_offices/comm_planning/budget/fy20>

Con el propósito de distribuir las asignaciones, el **DVPR** utilizó la fórmula establecida en la Ley Núm. 137-2014, según enmendada. Así, los fondos se asignaron de manera equitativa a todos municipios, con excepción de los municipios de Vieques y Culebra, que recibieron un 15% adicional. El DVPR, como administrador del Programa Estatal de CDBG, reservó el 3% de las primeras dos asignaciones y el 2% de la tercera asignación, para efectos de atender gastos de administración. Mientras que los municipios podrán utilizar hasta 10% de la primera y segunda asignación para gastos administrativos. De acuerdo con las normas publicadas para efectos de CDBG-CV, los fondos podrán utilizarse para aquellas actividades dirigidas a la preparación, prevención y respuesta al COVID-19. Es decir, aquellas actividades que vayan dirigidas a:

* **preparar a la comunidad, en particular personas de ingresos bajos y moderados, para prevenir el COVID-19 y sus posibles efectos;**
* **prevenir nuevos contagios o la propagación del virus; y**
* **responder o atender las repercusiones en la salud, sociales y económicas de la pandemia.**

Por tanto, no se limita a actividades dirigidas a personas que han contraído el virus, sino también aquellas en riesgo de contraerlo y aquellos impactos indirectos, como, por ejemplo, la pérdida de empleo o disminución de ingresos, producto de la pandemia.

Los Municipios subrecipientes de fondos, podrán elegir implementar el Programa, de acuerdo con las normas contenidas en este manual.

# Propósito

En este Manual de Políticas y Procedimientos se establecen los parámetros que regirán el *Programa Facilidades Públicas en Respuesta al COVID-19*. Los Municipios deberán seguir las normas aquí establecidas en la implementación y desarrollo de actividades de facilidades públicas para prepararse, prevenir y responder al COVID-19. El manual se enfoca en aquellos aspectos particulares a la implementación de la actividad de facilidades públicas en el contexto de la pandemia. En todo lo restante, los Municipios deberán seguir las normas que ha publicado el Programa y aquellas contenidas en la legislación y reglamentación, local y federal, aplicables.

# Leyes, reglamentos y normas aplicables

Estas guías se promulgan en conformidad con las siguientes leyes y reglamentos:

1. Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por el Coronavirus, Ley Pública Num.116-136), Título XII, Sección B
2. Ley de Alivio, Emergencia y Asistencia, Robert T. Stafford Ley Pública Núm. 100-707, según enmendada
3. Ley de Vivienda y Desarrollo Comunitario de 1974, según enmendada, Secciones 105(a)(22), 101(c), 104(b), 105(a)(2), 105(c) §570.201(c),
4. Notificación del Registro Federal FR-6218-N-0, Notice of Program Rules, Waivers, and Alternative Requirements Under the CARES Act for Community Development Block Grant Program Coronavirus Response Grants, Fiscal Year 2019 and 2020 Community Development Block Grants, and for Other Formula Programs

24 CFR 570 §570.207, §570.208

1. 2 CFR 200
2. Otras normas, flexibilidades o requisitos alternos promulgados por el Gobierno Federal y Local, según aplicables.

# Definiciones

**Área de Servicio -** Es el área que será beneficiada o que será servida por un proyecto, en este caso, de facilidad pública. Los límites del área de servicio deben ser contiguos, aunque no tienen que coincidir geográficamente con los tractos Censales u otro limite reconocido oficialmente. Sin embargo, tiene que ser un área principalmente residencial.

**Encuesta** – Método alterno que se utiliza para documentar el objetivo nacional de área beneficio. De utilizar ese método, el Municipio debe cumplir con las disposiciones del memorando circular, [MC 2016-09 Normativa que Regula la Metodología para Determinar Elegibilidad bajo el 24 CFR 580.483 (b)(1)(i) a través de Encuestas](http://www.ocam.pr.gov/sites/default/files/MC-2016-09.pdf).

**Facilidad pública** – Incluye aquellas facilidades y mejoras públicas de dominio público, o que pertenecen a una entidad sin fines de lucro y están accesibles al público en general. Para efectos de los fondos CDBG-CV, los fondos podrán ser utilizados para proyectos de facilidades públicas, no así proyectos de infraestructura. Esto incluye, por ejemplo, Centros comunales y / o tecnológicos; Facilidades para poblaciones especiales (envejecientes, personas con impedimentos, Jóvenes, cuidado infantil, personas sin hogar, personas con VIH/SIDA, personas maltratadas); Facilidades de salud; entre otras que vayan a ser utilizadas en la preparación, prevención o respuesta al COVID-19.

**Localización –** Ubicación específica de la facilidad pública.

# Responsabilidades del DVPR

1. Asesorar y adiestrar al personal de Programas Federales de los municipios participantes en todo lo relacionado al Programa y su implantación.
2. Emitir las autorizaciones correspondientes a los proyectos de facilidades públicas, siempre y cuando el Municipio cumpla con las acciones y trámites requeridos (ej. Requisitos ambientales).
3. Aprobar toda requisición que cumpla con los criterios establecidos y referirla para el pago correspondiente.
4. Monitorear el cumplimiento mediante visitas de seguimiento y otros procesos de monitoria, según establecido en su plan de trabajo y las guías emitidas por HUD.

# Acciones y responsabilidades a nivel del Municipio

1. Designar uno (1) o dos (2) funcionarios para que coordinen las actividades de este Programa, incluyendo aquellas personas que estarán a cargo del manejo y seguimiento al proyecto de rehabilitación o construcción.
2. Realizar esfuerzos de divulgación del Programa y orientar a los ciudadanos interesadas en participar en el Programa.
3. Asegurar y mantener la documentación correspondiente, según aplique, para evidenciar que los fondos se utilizan para los propósitos expuestos en la solicitud presentada y que se utilizan para actividades elegibles en preparación, prevención y asistencia al COVID-19.
4. Asegurar que los fondos son utilizados para cubrir gastos elegibles, razonables en cumplimiento con los requisitos administrativos emitidos por la Oficina de Gerencia y Presupuesto Federal (2 CFR Sub-parte E)[[3]](#footnote-3).
5. Cumplir con las normas aplicables a atender conflictos de interés.
6. Asegurar que los terceros con quienes se contrate para la rehabilitación o construcción no estén en la lista de suspensión o tengan alguna prohibición para contratar, en conformidad con el 2 CFR § 200.213.
7. Cumplir con las disposiciones relacionadas a la adquisición y contratación de bienes y servicios contenidas en el 2 CFR 200 y las normas y circulares que a esos efectos ha emitido el Departamento de la Vivienda (DVPR) y enviar al DVPR copia de todo contrato otorgado con terceras personas y/o entidades, para la construcción de las mejoras y remodelaciones de las facilidades públicas y/o adquisiciones de materiales a ser sufragados con los fondos asignados bajo este contrato, los cuales deben tener las cláusulas requeridas por la reglamentación según apliquen (2 CFR 200.317, 2 CFR 200.326 véase Anejo para más detalles).
8. Monitorear e inspeccionar las labores realizadas por sus contratistas y velar porque éstos cumplan con las leyes y reglamentos estatales y federales aplicables. Si el Municipio detecta cualquier violación, tendrá que notificar al DVPR.
9. Cumplir con todas aquellas normas aplicables y requisitos trasversales relacionadas a proyectos de rehabilitación y/o construcción de facilidades públicas, contenidas en las leyes y reglamentación, local y federal, aplicables, así como las normas o directrices publicadas por el Departamento de la Vivienda a esos efectos. Esto incluye, por ejemplo, requisitos de revisión ambiental, requisitos relacionados a contratación, normas laborales y pre-construcción, disposiciones sobre ingreso de programa, entre otros.
10. Mantener evidencia en los archivos para futuras monitorias por parte del Departamento de la Vivienda y de otras agencias federales y estatales concernientes de toda la documentación programática y fiscal requerida por la leyes y normas aplicables.

# Descripción del Programa

La sección siguiente incluye una descripción de las actividades elegibles bajo el *Programa de Facilidades Públicas en Respuesta al COVID-19*. El Municipio podrá implementar otras actividades de facilidad pública, según definidas en este manual, siempre y cuando sea en consulta y con la autorización del Departamento de la Vivienda de Puerto Rico.

Es importante señalar, que toda actividad de facilidades públicas a implementarse debe cumplir con los siguientes requisitos:

1. Debe ser una actividad elegible bajo CDBG
2. Debe cumplir con un objetivo nacional
3. Debe implementarse en preparación, prevención o respuesta al COVID-19

## Actividades, usos elegibles y objetivo nacional

Los Municipios podrán llevar a cabo las siguientes actividades y usos bajo el Programa de *Facilidades Públicas en Respuesta al COVID-19*:

| Construcción - Huerva**Programa** | **Programa de facilidades públicas para usos de salud en respuesta al COVID-19** |
| --- | --- |
| **Código HUD:** | **03P** |
| **Objetivo**  **Nacional:** | **LMA Área Beneficio** |
| **Descripción de los usos:** | Adquisición, construcción, reconstrucción o instalación de obras públicas, instalaciones y obras u otras mejoras; 42 U.S.C. 5305 (a)(2), 24 CFR 570.201 (c) para realizar pruebas y/o diagnósticos, establecer una clínica de tratamiento, o contar con una instalación para centralizar el cuidado a pacientes.  Igualmente, se pueden rehabilitar edificios y realizar mejoras (incluyendo asistencia provisional); 42 U.S.C. 5305 (a)(4), 24 CFR 570.201 (f), 570.202 (b). Esto incluye la rehabilitación (quizás remplazando su sistema de aire acondicionado) de un edificio comercial o escuela cerrada para establecer una clínica de tratamiento, adquirir y rehabilitar rápidamente un hotel para ampliar la capacidad de los hospitales de habitaciones de aislamiento, y llevar a cabo mejoras provisionales a propiedades privadas para que un paciente pueda permanecer en cuarentena de forma temporal. |

| Construcción - Huerva**Programa** | **Facilidades públicas de uso comunitario en respuesta al COVID-19** |
| --- | --- |
| **Código HUD:** | **03E** |
| **Objetivo**  **Nacional:** | **LMA Área Beneficio** |
| **Descripción de los usos:** | Adquisición, construcción o rehabilitación de instalaciones que estén principalmente diseñadas para servir a una comunidad y que serán utilizadas para servicios sociales para que las personas puedan atender las necesidades que surjan tras el COVID-19. Esto puede incluir, por ejemplo, centros con acceso a computadoras para que los estudiantes puedan conectarse a sus clases. |

| Construcción - Huerva**Programa** | **Facilidades para poblaciones vulnerables en respuesta al COVID-19** |
| --- | --- |
| **Código HUD:** | **03E** |
| **Objetivo**  **Nacional:** | **LMA - Área Beneficio**  **LMC- Clientela limitada a personas de IBM** |
| **Descripción de los usos:** | Adquisición, construcción, conversión de edificios o rehabilitación de albergues temporales y viviendas transitorias para personas sin hogar, incluidas las víctimas de la violencia doméstica, la violencia entre parejas, la agresión sexual o el acecho, las víctimas de desastres, entre otros. Esto incluye el poder rehabilitar los edificios para cumplir con las medidas de seguridad necesarias en el contexto del COVID-19. |

Los siguientes son ejemplos de **actividades no elegibles o que pudieran ser no elegibles:**

1. Mantenimiento y reparación general de las facilidades públicas por lo general no son elegibles.
2. Los gastos operacionales de las facilidades públicas no son elegibles a menos que sean parte de una actividad de servicio público asistida con los fondos de CDBG o elegible por ser una actividad de asistencia provisional.
3. Una facilidad pública es elegible para recibir fondos bajo el programa de CDBG aunque sea parte de un edificio multiuso que contiene usos que no son elegibles, siempre y cuando cumpla con lo siguiente:
   1. La porción propuesta elegible de la facilidad pública ocupará un área designada y discreta dentro del edificio multiuso; y
   2. El recipiente asignará los costos atribuibles a los fondos para la parte del edificio que es elegible de manera separada, distinta y solamente podrán ser utilizados los mismos en aquellas áreas elegibles.

## Cumplimiento con objetivo nacional

Según se indicó en la sección previa, los municipios podrán documentar el cumplimiento con objetivo nacional a través de Área Beneficio, y en algunas instancias bajo Clientela Limitada.

En el caso de llevar a cabo la actividad bajo el objetivo nacional de **LMA- Área de beneficio a personas de IBM**, el Municipio deberá asegurar que cuenta en sus expedientes con información que demuestre:

* 1. La ubicación de la actividad.
  2. Definición y límites del área de servicio y los criterios utilizados para definir la misma a base de la naturaleza de la actividad, ubicación de la actividad, acceso, disponibilidad de actividades comparables, límites de las instalaciones y servicios públicos. Los límites del área de servicio deben ser contiguos, aunque no tienen que coincidir geográficamente con los tractos Censales u otro limite reconocido oficialmente. Sin embargo, tiene que ser principalmente residencial, demostrado a través de – por ejemplo –mapas de zonificación. Como anejo a este manual se incluye una hoja guía para asistir al Municipio en el proceso de definir el Área de Servicio. De ordinario, el DVPR avalará esa definición, siempre y cuando sea razonable y tome en consideración los elementos descritos en la hoja y la reglamentación aplicable.
  3. Información de los ingresos del área de acuerdo al *Mapping tool* y bases de datos provistas por HUD, o según el método de encuesta, de acuerdo a como lo haya documento en su propuesta. De haberse utilizado el método de encuesta, el Municipio deberá mantener copia en expediente de los cuestionarios y metodología utilizados para documentar los ingresos.

Además, el Municipio deberá **mantener evidencia de la provisión del servicio a través de, por ejemplo, lista de asistencia y certificación de servicios provistos**, entre otra información. Igualmente, deberá poder evidenciar que la actividad está abierta a la comunidad y se provee en horarios accesibles.

Dependiendo de la población a servirse, en el caso del Programa de Facilidades para poblaciones vulnerables en respuesta al COVID-19, el Municipio podrá documentar el cumplimiento de objetivo nacional bajo **Clientela Limitada**, bajo la presunción de Ingresos Bajos y Moderados. Es decir, que el programa debe ir dirigido exclusivamente a servir a una clientela que se presume de ingresos bajos y moderados y, por lo tanto, deberá contar con información en los expedientes que demuestre que pertenece a una de las poblaciones siguientes. El Municipio debe asegurar que solicita las evidencias correspondientes al momento de la solicitud del participante.

1. menores víctimas de maltratado o víctimas de violencia doméstica (auto-certificación o carta de proveedor del que fue referido, esta deberá mantenerse en otro expediente confidencial)
2. envejecientes (mayores de 65 años) (certificado de nacimiento, licencia o identificación oficial donde se pueda identificar la edad)
3. personas con impedimentos severos (certificación de discapacidad o copia de SSI),
4. personas sin hogar (auto-certificación o carta de proveer de servicios del que fue referido o carta de desalojo o resolución de tribunal),
5. personas que viven con SIDA (carta de proveedor de servicios del que fue referido o de médico, No incluye VIH, solo SIDA),

# Consideraciones en proyectos que implican construcción

La construcción de un proyecto de facilidades públicas debe ser supervisada y fiscalizada intensamente para asegurar que se realiza en cumplimiento con la legislación y reglamentación local y federal aplicables. El Municipio puede realizar estas tareas con su propio personal o puede contratar profesionales privados. El Municipio debe asegurarse que el contratista tenga al día su licencia profesional y mantenga su independencia de las restantes personas o entidades relacionadas con el proyecto.

En cada proyecto, el Municipio debe designar el personal necesario para realizar la supervisión. Con la excepción de los proyectos más pequeños, esto requiere que tenga uno o más inspectores con las funciones de:

1. Cotejar que el trabajo se lleve a cabo de acuerdo a los planos y especificaciones.
2. Notificar las desviaciones, de forma inmediata, al Municipio y al diseñador.
3. Informar al Municipio y al diseñador cualquier situación que pueda dar lugar a cambios en los planos y las especificaciones del proyecto.
4. Documentar la actividad en el proyecto. Esto incluye preparar informes diarios donde se indiquen los detalles de la construcción del proyecto, tales como: descripción del trabajo realizado, personal que participó, materiales y equipos utilizados, estado del tiempo, problemas encontrados y otros.
5. Realizar otras tareas que se le asignen.

Por otro lado, el Municipio tiene que implantar un sistema de contabilidad y control de costosdurante la construcción del proyecto. Dicho sistema debe identificar variaciones entre el costo presupuestado y el costo actual. Hay que actualizar periódicamente el estimado de costos del proyecto para compararlo con el presupuesto. Además, desarrollar e implantar un sistema para darle seguimiento al progreso del proyecto en términos de tiempo. Para esto, es necesario que se realicen actualizaciones periódicas del plan de trabajo. El Municipio debe desarrollar e implantar un sistema para preparar, revisar y procesar requisiciones de pago del contratista y las órdenes de cambio del proyecto.

Es responsabilidad del Municipio vigilar y coordinar el trabajo del contratista, el diseñador y del propio Municipio; de forma tal que se cumpla con los objetivos en cuanto a costo, tiempo de construcción y calidad del proyecto. Para esto, es necesario realizar reuniones efectivas durante la construcción del proyecto con el contratista y sus sub-contratistas, el diseñador y sus especialistas, el dueño y sus representantes y otros que intervienen en la construcción del proyecto. El propósito de estas reuniones es asegurar que el trabajo se realiza de acuerdo con los planos y especificaciones y coordinar el trabajo. En estas reuniones se deben tratar temas tales como:

1. El progreso del proyecto en términos del tiempo establecido en el contrato, extensiones, la fecha de terminación y el costo.
2. El plan e itinerario del trabajo pendiente por realizarse (*Critical Path Method o CPM*).
3. El seguimiento a los sometimientos (*submittals*) y la aprobación o rechazo de los mismos.
4. Las solicitudes de información (*requests for information o RFI*) y su contestación.
5. Las certificaciones para pago y órdenes de cambio (*change orders*).
6. La coordinación de inspecciones y medidas a tomar cuando los resultados demuestran que el trabajo no cumple con lo especificado.
7. La coordinación con otras agencias gubernamentales, especialmente cuando se tiene que trabajar en una propiedad que pertenece a otra agencia (como por ejemplo en corte de carretera estatal, o necesidad de mover líneas de agua potable, alcantarillado o energía eléctrica).
8. La coordinación del trabajo a realizarse por el Municipio contratante o mediante otro contratista (si alguno).
9. La coordinación del material, equipo o servicios a proveerse por el Municipio (si alguno).
10. La efectividad del programa del contratista para la seguridad en el proyecto en cuanto a robo, daños por causas naturales como inundaciones, tormentas, etc. y para la seguridad de los que laboran en el proyecto en relación con la salud y prevención de accidentes.
11. Aspectos técnicos de la construcción.
12. El control de erosión, prevención de la sedimentación y otros requisitos ambientales.
13. El cumplimiento de leyes y reglamentos.
14. La documentación del trabajo realizado.

## Pagos al Contratista

En la industria de la construcción se le paga al contratista según progresa el proyecto. La mayoría de los contratos estipulan que al contratista se le paga mensualmente por el trabajo realizado el mes anterior y por los materiales almacenados en el proyecto a fin del mes que no han sido instalados. La forma de determinar el trabajo realizado durante el mes anterior depende de si el contrato es a precio unitario o a precio englobado. En los proyectos a precio englobado, el contratista somete en la subasta un precio que incluye todo el trabajo en el proyecto.

Para propósitos del pago, se incluirá una cláusula en el contrato que indique que el contratista debe entregar, pocos días después de la adjudicación del contrato, un itinerario de desembolsos (“schedule of values or breakdown for payment”), con las cantidades y las fechas en que va a necesitar el dinero. Dicho itinerario se le entrega al Municipio y este cotejará que el mismo sea razonable.

El Municipio retendrá el diez por ciento (10%) de cada pago como garantía adicional de que el contratista terminará el proyecto de acuerdo con los planos y especificaciones. La cantidad retenida se devuelve al contratista cuando el proyecto está terminado. Usualmente se incluye información adicional sobre la devolución del retenido en cláusulas que cubren la terminación del proyecto y el pago final.

En todos los proyectos, el Municipio mantiene su responsabilidad final de asegurar el cumplimiento de las regulaciones federales y que las metas del programa se cumplan. Por lo tanto, el Municipio debe realizar inspecciones periódicas para evaluar el progreso de la construcción. Las inspecciones son un aspecto necesario para la supervisión general de la construcción, dado que ello asegura que todo el trabajo sea realizado a tiempo, dentro de las guías de calidad establecidas y en cumplimiento con los códigos de las regulaciones federales.

Es responsabilidad del Municipio el asegurar que los estándares adoptados por sus programas sean incluidos durante el proceso de construcción, incluyendo los materiales utilizados y los métodos de instalación. La Oficina de Programas Federales revisará la solicitud de pagos del contratista y subcontratistas y el progreso de la obra para asegurarse que no sean compensados por los trabajos no realizados. También revisará las órdenes de cambios y aprobará aquellas que sean necesarias para terminar el proyecto de acuerdo a los estándares de calidad y en cumplimiento con los códigos y en rechazo de aquellas que sólo aumentarían los costos futuros del proyecto.

Una vez terminen los trabajos de construcción, el Municipio requerirá al ingeniero/arquitecto y al contratista que completen la inspección final del proyecto. Esta inspección asegura que los trabajos se realizaron en forma aceptable y de acuerdo a lo establecido en los planos y especificaciones.

Si hay trabajos adicionales o correcciones, se tiene que realizar una lista de cotejo (“punch list”) que detalle todo lo que falta. El “punch list” representa una lista de deficiencias de la construcción del proyecto, las cuales se deben corregir antes del pago final al contratista. Un itinerario de terminación para estos detalles debe ser negociado con el contratista y un por ciento correspondiente al costo debe ser retenido hasta la finalización total.

Después de la terminación de la inspección y del aviso del arquitecto, el Municipio le requerirá al contratista provea lo siguiente:

1. Certificaciones de costo
2. Garantías
3. Planos “as built”
4. Manual de especificaciones
5. Relevo de gravámenes

La información sometida por el contratista debe incluir todos los sub-contratistas y suplidores. El pago final no se debe realizar hasta que los documentos sean recibidos y los relevos sean verificados.

# Proceso de requisición de fondos

El Municipio deberá seguir los pasos requeridos de ordinario, según lo realiza para las requisiciones de reembolsos del programa de CDBG regular.

1. El trámite de la Solicitud de fondos no debe depender de transferencias, enmiendas y/o reprogramaciones que no estén aprobadas.
2. Cuando el Municipio solicite fondos y utilice el procedimiento de enmienda, es indispensable que sometan el desglose de los gastos revisados de los proyectos afectados.
3. El contrato entre el Municipio y DVPR debe estar vigente a la fecha en que se incurrió el gasto.
4. Es necesario el cumplimiento con los requisitos de Revisión Ambiental para que los fondos sean liberados.
5. La Solicitud de Fondos tienen que estar acompañada de la evidencia que se requiere para proceder con el pago, y la evidencia tiene que estar debidamente firmada por el Alcalde, el Director de Obras Públicas, Inspector o Supervisor de la obra o algún otro funcionario municipal a quien este designe. La documentación Requerida para Procesar Solicitudes de Fondos incluye:
6. Certificaciones de los Contratistas
7. Facturas por concepto de materiales - en aquellos casos en que el volumen de las facturas sea significativo deberán enviar una certificación donde incluyan: la fecha, número, suplidor y cantidad de factura.
8. Contrato de Servicios Profesionales
9. Contrato de Renta de Equipo
10. Contrato de Construcción
11. Certificación de nómina de proyectos desarrollados por administración.
12. Evidencia fotográfica de los rótulos donde se indica el origen de los fondos y la obra a desarrollarse, según las especificaciones del contrato.

Cuando el Municipio solicite la totalidad de los fondos asignados al proyecto, deberá someter:

1. Notificación del 10% retenido
2. Carta de relevo de la Administración del Fondo del Seguro del Estado. En aquellos casos donde las obras estén completadas y los fondos estén obligados y el Municipio no tenga la carta de relevo del fondo, entonces deberán incluir una certificación donde se justifique el solicitar los fondos para depositarlos en una cuenta especial.
3. Carta de aceptación del proyecto.

# Prohibición de duplicidad de beneficios

La Sección 312 de la Ley Robert T. Stafford para Ayuda en Desastres y Asistencia de Emergencia (*42 U.S.C. 5155*) y el *44 CFR 206.191* dispone, en términos generales, que se prohíbe que cualquier persona o entidad reciba fondos federales por cualquier pérdida para la que ya ha recibido asistencia económica de cualquier otro programa, seguros privados, asistencia benéfica o cualquier otra fuente. Al igual que con otras asignaciones de fondos federales, los municipios deben cumplir con la normativa sobre duplicidad de beneficios al recibir fondos CDBG-CV. A los efectos de poder constatar la no duplicidad de beneficios, el Municipio deberá mantener evidencia de los costos totales del proyectos y fuentes de fondos. En la eventualidad de que el Departamento de la Vivienda identifique una duplicidad en fondos, el Municipio vendrá obligado a devolver los fondos en CDBG.

# INGRESO DE PROGRAMA

1. Los ingresos y gastos de los programas generados por la utilización de los fondos del CDBG-CV se tratarán como ingresos de programas de CDBG regular y se registrarán como parte de las transacciones financieras del programa de subvenciones del CDBG de fórmula anual. El Municipio deberá someter a la DVPR los Informes sobre Ingreso de Programa, tal cual somete periódicamente al DVPR.

# REQUISITOS DE DOCUMENTACIÓN Y MANEJO DE EXPEDIENTES

En la ejecución de los Programas de Servicio Público, el Municipio se compromete a cumplir con las disposiciones de la Ley de Vivienda y Desarrollo Comunal de 1974, con la reglamentación en el 24 CFR Parte 570, la reglamentación de la OMB codificada en el 2 CFR 200 *Uniform Administrative Requirements, Cost Principles, and Audit Requirements for Federal Awards* y con cualquier otra ley o reglamentación federal aplicable al Programa CDBG del Estado y con la reglamentación establecida por “DVPR” o por el Gobierno de Puerto Rico que inciden en la documentación y manejo de expedientes. A esos efectos:

1. El Municipio deberá someter a la DVPR el Informe Trimestral de Gastos, tal cual somete periódicamente al DVPR.
2. El Municipio será responsable de mantener evidencia en los archivos para futuras monitorias por parte del Departamento de la Vivienda y de otras agencias federales y estatales concernientes.
3. El Municipio se compromete a mantener la información relacionada al cumplimiento con la duplicidad de beneficios.

# Monitoría

La División de Reglamentación e Intervención Fiscal adscrita al Programa CDBG en el DVPR llevará a cabo monitorias durante los **dos años posteriores a la finalización del proyecto**, y revisará una muestra de los casos aprobado bajo este programa en los municipios participantes como parte de su plan de trabajo anual. Este plan de trabajo identifica las acciones que se tomarán para evaluar el desempeño del municipio participante del programa, incluyendo los participantes serán monitoreados, el tipo de monitoria, los programas y funciones a monitorear, las fechas previstas y los recursos necesarios.

## Proceso General de Monitoría

La monitoría podrá llevarse a cabo en el municipio o vía remoto, a discreción del DVPR. Independientemente del tipo de monitoría a llevarse a cabo, las monitorías del DVPR deben contener los siguientes elementos:

1. Notificación a los participantes del programa: Una vez se determine la fecha y el tipo de monitoría, se enviará una carta al participante del programa. Salvo circunstancias excepcionales, esta carta será enviada al menos dos semanas antes al comienzo de la monitoría y discutirá la agenda de la monitoría, identificará las áreas a ser monitoreadas, y los nombres y cargos del personal DVPR que realizará la monitoría.
2. Consulta con áreas operacionales – previo al comienzo de la intervención, el monitor a cargo se reunirá con personal de Área de Finanzas y Presupuesto del DVPR para conocer el estatus de las actividades que está desarrollando el municipio.
3. Conferencia inicial: El propósito de la conferencia inicial es explicar cómo se realizará la monitoría; identificar personal clave del programa que le ayudará durante la monitoría; establecer los periodos de entrevista y, si aplica, programar inspecciones físicas.
4. Proceso de evaluación: conlleva entrevistas y revisión de archivos para verificar y documentar el cumplimiento y desempeño del participante.
5. Al concluir la intervención, el monitor tendrá una reunión con personal de Área de Finanzas y Presupuesto para presentarles los hallazgos preliminares, recibir su insumo y desarrollar posibles recomendaciones y acciones correctivas.
6. Conferencia de salida: Al finalizar la monitoría, el DVPR llevará a cabo una conferencia de salida con los funcionarios o personal indicado para discutir conclusiones preliminares. En la medida que exista discrepancia entre los funcionarios del Municipio y los monitores de DVPR, en cuanto a las conclusiones preliminares, tal discrepancia se hará constar en el resumen de la monitoría y se tomará en consideración al redactar la carta de monitoría.
7. Informe: El DVPR emitirá un informe de monitoría que incluirá los señalamientos y áreas de preocupación en relación a las normas aplicables al Programa. Al Municipio se le proveerá un tiempo razonable para contestar el informe y someter su plan de acción correctiva.

Para llevar a cabo las monitorías de los Programas de Servicio Público (Fondos CDBG-CV) el monitor podrá utilizar las siguientes hojas de cotejo:

1. Hoja de Monitoría de Objetivo Nacional de Clientela Limitada o de Área Beneficio
2. Hoja de Monitoreo de facilidades públicas
3. Hoja de Monitoreo de adquisición de bienes y servicios
4. Hoja de Monitoreo de cotejo de revisión ambiental
5. Hoja de Monitoreo de normas laborales
6. Hoja de Monitoreo requisitos de contratación
7. Otras, según apliquen.

# ANEJOS

### CERTIFICACION CUMPLIMIENTO CON NORMAS Y REGULACIONES EN LOS MANUALES (FORMULARIO DV-CV-FP-001)

**PROGRAMA DE FACILIDADES PÚBLICAS EN RESPUESTA AL COVID-19**

**PROYECTO Número de Proyecto**

**CERTIFICACIÓN**

Certifico que,el Municipio de Nombre del Municipio cumplirá con todas las normas y regulaciones establecidas en el **Manual de , en Respuesta al COVID-19**, del Programa CDBG-CV y mantendrá los expedientes que validen, en procesos de monitoria, el cumplimiento de dichos requisitos.

En testimonio de lo cual, y para que así conste, firmo esta certificación, en Pueblo, Puerto Rico, el día de mes de año.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Click or tap here to enter text. |  |  |
| **Nombre del(de la) Alcalde(sa)** |  | **Firma del(de la) Alcalde(sa)** |

**SELLO DEL MUNICIPIO**

### HOJA GUÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE ÁREA DE SERVICIO/BENEFICIO (FORMULARIO DV-CV-FP-002)

**PROGRAMA DE FACILIDADES PÚBLICAS EN RESPUESTA AL COVID-19**

***Naturaleza de la actividad:***

La actividad responde a un uso elegible bajo el Programa CDBG.

La actividad se realiza en preparación, prevención o respuesta al COVID-19.

El Municipio ha definido el área de impacto o que se beneficiará del proyecto, más allá de la ubicación específica de la actividad.

El Municipio ha definido la escala o tamaño del proyecto y como este beneficiará el área de servicio propuesta.

El proyecto beneficiará un área residencial, o predominantemente residencial.

***Ubicación de la actividad:***

El Municipio definió la localización específica del proyecto.

El Municipio cuenta con una descripción clara de la localización del proyecto en función de las comunidades aledañas y la manera en que el proyecto beneficiará las mismas.

La ubicación propuesta por el Municipio y el área de servicio son elegibles bajo el programa CDBG en conformidad con el método que haya utilizado el Municipio para documentar ingresos.

***Acceso:***

El proyecto es accesible a los residentes del área de servicio establecida.

No se observan barreras o limitaciones físicas que puedan impedir que las personas que residen en el área se puedan beneficiar del proyecto.

No se observan otras barreras o limitantes para que los residentes puedan acceder la facilidad pública como, por ejemplo, aquellas asociadas a tarifa por uso, horario, estacionamiento, entre otras.

***Disponibilidad de actividades comparables:***

El área demuestra una necesidad o demanda no satisfecha por ese tipo de facilidad pública.

En el área de servicio no se identifican otras actividades que ya cumplan con esos propósitos sirviendo las mismas comunidades.

**Límites de las instalaciones y servicios públicos:**

El área de servicio se determinó en función de límites o distritos definidos o establecidos (por ejemplo: zona de planificación especial, centro urbano).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Click or tap here to enter text. |  |  |
| **NOMBRE DEL DIRECTOR(A) PROGRAMAS FEDERALES** |  | **FECHA** |
|  |  |  |
| **FIRMA DEL DIRECTOR(A)**  **PROGRAMAS FEDERALES** |  |  |

### AUTO-CERTIFICACIÓN (FORMULARIO DV-CV-FP-003)

**PROGRAMA DE FACILIDADES PÚBLICAS EN RESPUESTA AL COVID-19**

El documento siguiente tiene como propósito certificar una condición que, junto a otros requisitos, podría cualificarle para recibir los servicios del Programa. La misma se manejará de manera confidencial, y separada de su expediente de caso.

**Nombre del Participante:** Click or tap here to enter text.

**Dirección:** Click or tap here to enter text.

**(Si la persona no tiene hogar, favor de indicar N/A en el campo de dirección)**

**DECLARACIÓN**

Yo me considero en una de las categorías siguientes:

Encargado de menor víctima de maltratado

Víctima de violencia doméstica

Personas sin hogar

**Favor de iniciar cada una de las aseveraciones:**

\_\_\_\_\_\_\_ Reconozco que uno de los requisitos para la asistencia a través del Programa CDBG-CV está basado en la condición que incluyo en esta certificación.

\_\_\_\_\_\_\_ Reconozco que la información que aquí he incluido puede ser sujeta a verificación por parte del Municipio o del Departamento de la Vivienda de Puerto Rico, como administrador de los fondos.

Certifico que toda la información antes mencionada es cierta y correcta y que todo el ingreso ha sido informado. Entiendo que esta información es provista para la determinación de elegibilidad del Programa CDBG-CV y que los oficiales del Municipio o el Departamento de la Vivienda pueden verificar la información de este formulario. Soy consciente de que, de acuerdo al el Título 18, Sección 1001 del Código de EE. UU., si deliberadamente proveo información falsa puedo estar sujeto(a) a que me procesen conforme a las leyes estatales y federales que apliquen.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **Firma del Participante** |  | **Fecha** |

### 2 C.F.R. § 200.326 and 2 C.F.R. Part 200, Appendix II, Required Contract Clauses

**Current as of 1-9-17**

Requirements under the Uniform Rules. A non-Federal entity’s contracts must contain the applicable contract clauses described in Appendix II to the Uniform Rules (Contract Provisions for non-Federal Entity Contracts Under Federal Awards), which are set forth below. 2 C.F.R. § 200.326. For some of the required clauses we have included sample language or a reference a non-Federal entity can go to in order to find sample language. Please be aware that this is sample language only and that the non-Federal entity alone is responsible ensuring that all language included in their contracts meets the requirements of 2 C.F.R. § 200.326 and 2 C.F.R. Part 200, Appendix II. We do not include sample language for certain required clauses (remedies, termination for cause and convenience, changes) as these must necessarily be written based on the non-Federal entity’s own procedures in that area.

1. Remedies.

a. Standard: Contracts for more than the simplified acquisition threshold ($150,000) must address administrative, contractual, or legal remedies in instances where contractors violate or breach contract terms, and provide for such sanctions and penalties as appropriate. See 2 C.F.R. Part 200, Appendix II, A.

b. Applicability: This requirement applies to all FEMA grant and cooperative agreement programs.

2. Termination for Cause and Convenience.

a. All contracts in excess of $10,000 must address termination for cause and for convenience by the non-Federal entity including the manner by which it will be effected and the basis for settlement. See 2 C.F.R. Part 200, Appendix II, B.

b. Applicability. This requirement applies to all FEMA grant and cooperative agreement programs.

3. Equal Employment Opportunity.

a. Standard. Except as otherwise provided under 41 C.F.R. Part 60, all contracts that meet the definition of “federally assisted construction contract” in 41 C.F.R. § 60- 1.3 must include the equal opportunity clause provided under 41 C.F.R. § 60- 1.4(b), in accordance with Executive Order 11246, Equal Employment Opportunity (30 Fed. Reg. 12319, 12935, 3 C.F.R. Part, 1964-1965 Comp., p. 339), as amended by Executive Order 11375, Amending Executive Order 11246 Relating to Equal Employment Opportunity, and implementing regulations at 41 C.F.R. Part 60 (Office of Federal Contract Compliance Programs, Equal Employment Opportunity, Department of Labor). See 2 C.F.R. Part 200, Appendix II, ¶ C.

b. Key Definitions.

(1) Federally Assisted Construction Contract. The regulation at 41 C.F.R. § 60-1.3 defines a “federally assisted construction contract” as any agreement or modification thereof between any applicant and a person for construction work which is paid for in whole or in part with funds obtained from the Government or borrowed on the credit of the Government pursuant to any Federal program involving a grant, contract, loan, insurance, or guarantee, or undertaken pursuant to any Federal program involving such grant, contract, loan, insurance, or guarantee, or any application or modification thereof approved by the Government for a grant, contract, loan, insurance, or guarantee under which the applicant itself participates in the construction work.

(2) Construction Work. The regulation at 41 C.F.R. § 60-1.3 defines “construction work” as the construction, rehabilitation, alteration, conversion, extension, demolition or repair of buildings, highways, or other changes or improvements to real property, including facilities providing utility services. The term also includes the supervision, inspection, and other onsite functions incidental to the actual construction.

c. Applicability. This requirement applies to all FEMA grant and cooperative agreement programs.

d. The regulation at 41 C.F.R. Part 60-1.4(b) requires the insertion of the following contract clause:

“During the performance of this contract, the contractor agrees as follows:

(1) The contractor will not discriminate against any employee or applicant for employment because of race, color, religion, sex, or national origin. The contractor will take affirmative action to ensure that applicants are employed, and that employees are treated during employment without regard to their race, color, religion, sex, or national origin. Such action shall include, but not be limited to the following: Employment, upgrading, demotion, or transfer; recruitment or recruitment advertising; layoff or termination; rates of pay or other forms of compensation; and selection for training, including apprenticeship. The contractor agrees to post in conspicuous places, available to employees and applicants for employment, notices to be provided setting forth the provisions of this nondiscrimination clause.

(2) The contractor will, in all solicitations or advertisements for employees placed by or on behalf of the contractor, state that all qualified applicants will receive considerations for employment without regard to race, color, religion, sex, or national origin.

(3) The contractor will send to each labor union or representative of workers with which he has a collective bargaining agreement or other contract or understanding, a notice to be provided advising the said labor union or workers' representatives of the contractor's commitments under this section, and shall post copies of the notice in conspicuous places available to employees and applicants for employment.

(4) The contractor will comply with all provisions of Executive Order 11246 of September 24, 1965, and of the rules, regulations, and relevant orders of the Secretary of Labor.

(5) The contractor will furnish all information and reports required by Executive Order 11246 of September 24, 1965, and by rules, regulations, and orders of the Secretary of Labor, or pursuant thereto, and will permit access to his books, records, and accounts by the administering agency and the Secretary of Labor for purposes of investigation to ascertain compliance with such rules, regulations, and orders.

(6) In the event of the contractor's noncompliance with the nondiscrimination clauses of this contract or with any of the said rules, regulations, or orders, this contract may be canceled, terminated, or suspended in whole or in part and the contractor may be declared ineligible for further Government contracts or federally assisted construction contracts in accordance with procedures authorized in Executive Order 11246 of September 24, 1965, and such other sanctions as may be imposed and remedies invoked as provided in Executive Order 11246 of September 24, 1965, or by rule, regulation, or order of the Secretary of Labor, or as otherwise provided by law. (7) The contractor will include the portion of the sentence immediately preceding paragraph (1) and the provisions of paragraphs (1) through

(7) in every subcontract or purchase order unless exempted by rules, regulations, or orders of the Secretary of Labor issued pursuant to section 204 of Executive Order 11246 of September 24, 1965, so that such provisions will be binding upon each subcontractor or vendor. The contractor will take such action with respect to any subcontract or purchase order as the administering agency may direct as a means of enforcing such provisions, including sanctions for noncompliance: Provided, however, That in the event a contractor becomes involved in, or is threatened with, litigation with a subcontractor or vendor as a result of such direction by the administering agency the contractor may request the United States to enter into such litigation to protect the interests of the United States.”

4. Davis Bacon Act and Copeland Anti-Kickback Act.

a. Applicability of Davis-Bacon Act. The Davis-Bacon Act only applies to the emergency Management Preparedness Grant Program, Homeland Security Grant Program, Nonprofit Security Grant Program, Tribal Homeland Security Grant Program, Port Security Grant Program, and Transit Security Grant Program**. It does not apply to other FEMA grant and cooperative agreement programs, including the Public Assistance Program**.

b. All prime construction contracts in excess of $2,000 awarded by non-Federal entities must include a provision for compliance with the Davis-Bacon Act (40 U.S.C. §§ 3141-3144 and 3146-3148) as supplemented by Department of Labor regulations at 29 C.F.R. Part 5 (Labor Standards Provisions Applicable to Contracts Covering Federally Financed and Assisted Construction)). See 2 C.F.R. Part 200, Appendix II, D.

c. In accordance with the statute, contractors must be required to pay wages to laborers and mechanics at a rate not less than the prevailing wages specified in a wage determination made by the Secretary of Labor. In addition, contractors must be required to pay wages not less than once a week.

d. The non-Federal entity must place a copy of the current prevailing wage determination issued by the Department of Labor in each solicitation. The decision to award a contract or subcontract must be conditioned upon the acceptance of the wage determination. The non-Federal entity must report all suspected or reported violations to the Federal awarding agency.

e. In contracts subject to the Davis-Bacon Act, the contracts must also include a provision for compliance with the Copeland “Anti-Kickback” Act (40 U.S.C. § 3145), as supplemented by Department of Labor regulations at 29 C.F.R. Part 3 (Contractors and Subcontractors on Public Building or Public Work Financed in Whole or in Part by Loans or Grants from the United States). The Copeland Anti- Kickback Act provides that each contractor or subrecipient must be prohibited from inducing, by any means, any person employed in the construction, completion, or repair of public work, to give up any part of the compensation to which he or she is otherwise entitled. The non-Federal entity must report all suspected or reported violations to FEMA.

f. The regulation at 29 C.F.R. § 5.5(a) does provide the required contract clause that applies to compliance with both the Davis-Bacon and Copeland Acts. However, as discussed in the previous subsection, the Davis-Bacon Act does not apply to Public Assistance recipients and subrecipients**. In situations where the Davis-Bacon Act does not apply, neither does the Copeland “Anti-Kickback Act**.” However, for purposes of grant programs where both clauses do apply, FEMA requires the following contract clause:

“Compliance with the Copeland “Anti-Kickback” Act.

(1) Contractor. The contractor shall comply with 18 U.S.C. § 874, 40 U.S.C. § 3145, and the requirements of 29 C.F.R. pt. 3 as may be applicable, which are incorporated by reference into this contract.

(2) Subcontracts. The contractor or subcontractor shall insert in any subcontracts the clause above and such other clauses as the FEMA may by appropriate instructions require, and also a clause requiring the subcontractors to include these clauses in any lower tier subcontracts. The prime contractor shall be responsible for the compliance by any subcontractor or lower tier subcontractor with all of these contract clauses.

(3) Breach. A breach of the contract clauses above may be grounds for termination of the contract, and for debarment as a contractor and subcontractor as provided in 29 C.F.R. § 5.12.”

5. Contract Work Hours and Safety Standards Act.

a. Applicability: This requirement applies to all FEMA grant and cooperative agreement programs.

b. Where applicable (see 40 U.S.C. § 3701), all contracts awarded by the non-Federal entity in excess of $100,000 that involve the employment of mechanics or laborers must include a provision for compliance with 40 U.S.C. §§ 3702 and 3704, as supplemented by Department of Labor regulations at 29 C.F.R. Part 5. See 2 C.F.R. Part 200, Appendix II, ¶ E.

c. Under 40 U.S.C. § 3702, each contractor must be required to compute the wages of every mechanic and laborer on the basis of a standard work week of 40 hours. Work in excess of the standard workweek is permissible provided that the worker is compensated at a rate of not less than one and a half times the basic rate of pay for all hours worked in excess of 40 hours in the workweek.

d. The requirements of 40 U.S.C. § 3704 are applicable to construction work and provide that no laborer or mechanic must be required to work in surroundings or under working conditions which are unsanitary, hazardous or dangerous. These requirements do not apply to the purchases of supplies or materials or articles ordinarily available on the open market, or contracts for transportation or transmission of intelligence.

e. The regulation at 29 C.F.R. § 5.5(b) provides the required contract clause concerning compliance with the Contract Work Hours and Safety Standards Act:

“Compliance with the Contract Work Hours and Safety Standards Act.

(1) Overtime requirements. No contractor or subcontractor contracting for any part of the contract work which may require or involve the employment of laborers or mechanics shall require or permit any such laborer or mechanic in any workweek in which he or she is employed on such work to work in excess of forty hours in such workweek unless such laborer or mechanic receives compensation at a rate not less than one and one-half times the basic rate of pay for all hours worked in excess of forty hours in such workweek.

(2) Violation; liability for unpaid wages; liquidated damages. In the event of any violation of the clause set forth in paragraph (1) of this section the contractor and any subcontractor responsible therefor shall be liable for the unpaid wages. In addition, such contractor and subcontractor shall be liable to the United States (in the case of work done under contract for the District of Columbia or a territory, to such District or to such territory), for liquidated damages. Such liquidated damages shall be computed with respect to each individual laborer or mechanic, including watchmen and guards, employed in violation of the clause set forth in paragraph (1) of this section, in the sum of $10 for each calendar day on which such individual was required or permitted to work in excess of the standard workweek of forty hours without payment of the overtime wages required by the clause set forth in paragraph (1) of this section.

(3) Withholding for unpaid wages and liquidated damages. The (write in the name of the Federal agency or the loan or grant recipient) shall upon its own action or upon written request of an authorized representative of the Department of Labor withhold or cause to be withheld, from any moneys payable on account of work performed by the contractor or subcontractor under any such contract or any other Federal contract with the same prime contractor, or any other federally-assisted contract subject to the Contract Work Hours and Safety Standards Act, which is held by the same prime contractor, such sums as may be determined to be necessary to satisfy any liabilities of such contractor or subcontractor for unpaid wages and liquidated damages as provided in the clause set forth in paragraph (2) of this section.

(4) Subcontracts. The contractor or subcontractor shall insert in any subcontracts the clauses set forth in paragraph (1) through (4) of this section and also a clause requiring the subcontractors to include these clauses in any lower tier subcontracts. The prime contractor shall be responsible for compliance by any subcontractor or lower tier subcontractor with the clauses set forth in paragraphs (1) through (4) of this section.”

6. Rights to Inventions Made Under a Contract or Agreement.

a. Stafford Act Disaster Grants. This requirement **does not apply to the Public Assistance**, Hazard Mitigation Grant Program, Fire Management Assistance Grant Program, Crisis Counseling Assistance and Training Grant Program, Disaster Case Management Grant Program, and Federal Assistance to Individuals and Households – Other Needs Assistance Grant Program, as FEMA awards under these programs do not meet the definition of “funding agreement.”

b. If the FEMA award meets the definition of “funding agreement” under 37 C.F.R. § 401.2(a) and the non-Federal entity wishes to enter into a contract with a small business firm or nonprofit organization regarding the substitution of parties, assignment or performance of experimental, developmental, or research work under that “funding agreement,” the non-Federal entity must comply with the requirements of 37 C.F.R. Part 401 (Rights to Inventions Made by Nonprofit Organizations and Small Business Firms Under Government Grants, Contracts and Cooperative Agreements), and any implementing regulations issued by FEMA. See 2 C.F.R. Part 200, Appendix II, F.

c. The regulation at 37 C.F.R. § 401.2(a) currently defines “funding agreement” as any contract, grant, or cooperative agreement entered into between any Federal agency, other than the Tennessee Valley Authority, and any contractor for the performance of experimental, developmental, or research work funded in whole or in part by the Federal government. This term also includes any assignment, substitution of parties, or subcontract of any type entered into for the performance of experimental, developmental, or research work under a funding agreement as defined in the first sentence of this paragraph.

7. Clean Air Act and the Federal Water Pollution Control Act. Contracts of amounts in excess of $150,000 must contain a provision that requires the contractor to agree to comply with all applicable standards, orders, or regulations issued pursuant to the Clean Air Act (42 U.S.C. §§ 7401-7671q) and the Federal Water Pollution Control Act as amended (33 U.S.C. §§ 1251-1387). Violations must be reported to FEMA and the Regional Office of the Environmental Protection Agency. See 2 C.F.R. Part 200, Appendix II, ¶ G.

a. The following provides a sample contract clause concerning compliance for contracts of amounts in excess of $150,000:

“Clean Air Act

(1) The contractor agrees to comply with all applicable standards, orders or regulations issued pursuant to the Clean Air Act, as amended, 42 U.S.C. § 7401 et seq.

(2) The contractor agrees to report each violation to the (name of the state agency or local or Indian tribal government) and understands and agrees that the (name of the state agency or local or Indian tribal government) will, in turn, report each violation as required to assure notification to the (name of recipient), Federal Emergency Management Agency, and the appropriate Environmental Protection Agency Regional Office.

(3) The contractor agrees to include these requirements in each subcontract exceeding $150,000 financed in whole or in part with Federal assistance provided by FEMA.

Federal Water Pollution Control Act

(1) The contractor agrees to comply with all applicable standards, orders or regulations issued pursuant to the Federal Water Pollution Control Act, as amended, 33 U.S.C. 1251 et seq.

(2) The contractor agrees to report each violation to the (name of the state agency or local or Indian tribal government) and understands and agrees that the (name of the state agency or local or Indian tribal government) will, in turn, report each violation as required to assure notification to the (name of recipient), Federal Emergency Management Agency, and the appropriate Environmental Protection Agency Regional Office.

(3) The contractor agrees to include these requirements in each subcontract exceeding $150,000 financed in whole or in part with Federal assistance provided by FEMA.”

8. Debarment and Suspension.

a. Applicability: This requirement applies to all FEMA grant and cooperative agreement programs.

b. Non-federal entities and contractors are subject to the debarment and suspension regulations implementing Executive Order 12549, Debarment and Suspension (1986) and Executive Order 12689, Debarment and Suspension (1989) at 2 C.F.R. Part 180 and the Department of Homeland Security’s regulations at 2 C.F.R. Part 3000 (Nonprocurement Debarment and Suspension).

c. These regulations restrict awards, subawards, and contracts with certain parties that are debarred, suspended, or otherwise excluded from or ineligible for participation in Federal assistance programs and activities. See 2 C.F.R. Part 200, Appendix II, ¶ H; and Procurement Guidance for Recipients and Subrecipients Under 2 C.F.R. Part 200 (Uniform Rules): Supplement to the Public Assistance Procurement Disaster Assistance Team (PDAT) Field Manual Chapter IV, ¶ 6.d, and Appendix C, ¶ 2 [hereinafter PDAT Supplement]. A contract award must not be made to parties listed in the SAM Exclusions. SAM Exclusions is the list maintained by the General Services Administration that contains the names of parties debarred, suspended, or otherwise excluded by agencies, as well as parties declared ineligible under statutory or regulatory authority other than Executive Order 12549. SAM exclusions can be accessed at www.sam.gov. See 2 C.F.R. § 180.530; PDAT Supplement, Chapter IV, ¶ 6.d and Appendix C, ¶ 2.

d. In general, an “excluded” party cannot receive a Federal grant award or a contract within the meaning of a “covered transaction,” to include subawards and subcontracts. This includes parties that receive Federal funding indirectly, such as contractors to recipients and subrecipients. The key to the exclusion is whether there is a “covered transaction,” which is any nonprocurement transaction (unless excepted) at either a “primary” or “secondary” tier. Although “covered transactions” do not include contracts awarded by the Federal Government for purposes of the nonprocurement common rule and DHS’s implementing regulations, it does include some contracts awarded by recipients and subrecipient.

e. Specifically, a covered transaction includes the following contracts for goods or services:

(1) The contract is awarded by a recipient or subrecipient in the amount of at least $25,000.

(2) The contract requires the approval of FEMA, regardless of amount.

(3) The contract is for federally-required audit services.

(4) A subcontract is also a covered transaction if it is awarded by the contractor of a recipient or subrecipient and requires either the approval of FEMA or is in excess of $25,000.

d. The following provides a debarment and suspension clause. It incorporates an optional method of verifying that contractors are not excluded or disqualified:

“Suspension and Debarment

(1) This contract is a covered transaction for purposes of 2 C.F.R. pt. 180 and 2 C.F.R. pt. 3000. As such the contractor is required to verify that none of the contractor, its principals (defined at 2 C.F.R. § 180.995), or its affiliates (defined at 2 C.F.R. § 180.905) are excluded (defined at 2 C.F.R. § 180.940) or disqualified (defined at 2 C.F.R. § 180.935).

(2) The contractor must comply with 2 C.F.R. pt. 180, subpart C and 2 C.F.R. pt. 3000, subpart C and must include a requirement to comply with these regulations in any lower tier covered transaction it enters into.

(3) This certification is a material representation of fact relied upon by (insert name of subrecipient). If it is later determined that the contractor did not comply with 2 C.F.R. pt. 180, subpart C and 2 C.F.R. pt. 3000, subpart C, in addition to remedies available to (name of state agency serving as recipient and name of subrecipient), the Federal Government may pursue available remedies, including but not limited to suspension and/or debarment.

(4) The bidder or proposer agrees to comply with the requirements of 2 C.F.R. pt. 180, subpart C and 2 C.F.R. pt. 3000, subpart C while this offer is valid and throughout the period of any contract that may arise from this offer. The bidder or proposer further agrees to include a provision requiring such compliance in its lower tier covered transactions.”

9. Byrd Anti-Lobbying Amendment.

a. Applicability: This requirement applies to all FEMA grant and cooperative agreement programs.

b. Contractors that apply or bid for an award of $100,000 or more must file the required certification. See 2 C.F.R. Part 200, Appendix II, ¶ I; 44 C.F.R. Part 18; PDAT Supplement, Chapter IV, 6.c; Appendix C, ¶ 4.

c. Each tier certifies to the tier above that it will not and has not used Federal appropriated funds to pay any person or organization for influencing or attempting to influence an officer or employee of any agency, a member of Congress, officer or employee of Congress, or an employee of a member of Congress in connection with obtaining any Federal contract, grant or any other award covered by 31 U.S.C. § 1352. Each tier must also disclose any lobbying with non-Federal funds that takes place in connection with obtaining any Federal award. Such disclosures are forwarded from tier to tier up to the non-Federal award. See PDAT Supplement, Chapter IV, ¶ 6.c and Appendix C, ¶ 4.

d. The following provides a Byrd Anti-Lobbying contract clause:

“Byrd Anti-Lobbying Amendment, 31 U.S.C. § 1352 (as amended)

Contractors who apply or bid for an award of $100,000 or more shall file the required certification. Each tier certifies to the tier above that it will not and has not used Federal appropriated funds to pay any person or organization for influencing or attempting to influence an officer or employee of any agency, a member of Congress, officer or employee of Congress, or an employee of a member of Congress in connection with obtaining any Federal contract, grant, or any other award covered by 31 U.S.C. § 1352. Each tier shall also disclose any lobbying with non-Federal funds that takes place in connection with obtaining any Federal award. Such disclosures are forwarded from tier to tier up to the recipient.”

APPENDIX A, 44 C.F.R. PART 18 – CERTIFICATION REGARDING LOBBYING

Certification for Contracts, Grants, Loans, and Cooperative Agreements

(To be submitted with each bid or offer exceeding $100,000)

The undersigned [Contractor] certifies, to the best of his or her knowledge, that:

1. No Federal appropriated funds have been paid or will be paid, by or on behalf of the undersigned, to any person for influencing or attempting to influence an officer or employee of an agency, a Member of Congress, an officer or employee of Congress, or an employee of a Member of Congress in connection with the awarding of any Federal contract, the making of any Federal grant, the making of any Federal loan, the entering into of any cooperative agreement, and the extension, continuation, renewal, amendment, or modification of any Federal contract, grant, loan, or cooperative agreement.

2. If any funds other than Federal appropriated funds have been paid or will be paid to any person for influencing or attempting to influence an officer or employee of any agency, a Member of Congress, an officer or employee of Congress, or an employee of a Member of Congress in connection with this Federal contract, grant, loan, or cooperative agreement, the undersigned shall complete and submit Standard Form- LLL, “Disclosure Form to Report Lobbying,” in accordance with its instructions.

3. The undersigned shall require that the language of this certification be included in the award documents for all subawards at all tiers (including subcontracts, subgrants, and contracts under grants, loans, and cooperative agreements) and that all subrecipients shall certify and disclose accordingly.

This certification is a material representation of fact upon which reliance was placed when this transaction was made or entered into. Submission of this certification is a prerequisite for making or entering into this transaction imposed by 31, U.S.C. § 1352 (as amended by the Lobbying Disclosure Act of 1995). Any person who fails to file the required certification shall be subject to a civil penalty of not less than $10,000 and not more than $100,000 for each such failure.

The Contractor, , certifies or affirms the truthfulness and accuracy of each statement of its certification and disclosure, if any. In addition, the Contractor understands and agrees that the provisions of 31 U.S.C. § 3801 et seq., apply to this certification and disclosure, if any.

Signature of Contractor’s Authorized Official

Name and Title of Contractor’s Authorized Official

Date”

10. Procurement of Recovered Materials.

a. Applicability: This requirement applies to all FEMA grant and cooperative agreement programs.

b. A non-Federal entity that is a state agency or agency of a political subdivision of a state and its contractors must comply with Section 6002 of the Solid Waste Disposal Act, Pub. L. No. 89-272 (1965) (codified as amended by the Resource Conservation and Recovery Act at 42 U.S.C. § 6962). See 2 C.F.R. Part 200, Appendix II, ¶ J; 2 C.F.R. § 200.322; PDAT Supplement, Chapter V, ¶ 7.

c. The requirements of Section 6002 include procuring only items designated in guidelines of the EPA at 40 C.F.R. Part 247 that contain the highest percentage of recovered materials practicable, consistent with maintaining a satisfactory level of competition, where the purchase price of the item exceeds $10,000 or the value of the quantity acquired by the preceding fiscal year exceeded $10,000; procuring solid waste management services in a manner that maximizes energy and resource recovery; and establishing an affirmative procurement program for procurement of recovered materials identified in the EPA guidelines.

d. The following provides the clause that a state agency or agency of a political subdivision of a state and its contractors can include in contracts meeting the above contract thresholds:

“(1) In the performance of this contract, the Contractor shall make maximum use of products containing recovered materials that are EPA- designated items unless the product cannot be acquired—

(i) Competitively within a timeframe providing for compliance with the contract performance schedule;

(ii) Meeting contract performance requirements; or

(iii) At a reasonable price.

(2) Information about this requirement, along with the list of EPA designate items, is available at EPA’s Comprehensive Procurement Guidelines web site,

<https://www.epa.gov/smm/comprehensiveprocurement-guideline-cpg-program>.”

11. Additional FEMA Requirements.

a. The Uniform Rules authorize FEMA to require additional provisions for non- Federal entity contracts. FEMA, pursuant to this authority, requires or recommends the following:

b. Changes.

To be eligible for FEMA assistance under the non-Federal entity’s FEMA grant or cooperative agreement, the cost of the change, modification, change order, or constructive change must be allowable, allocable, within the scope of its grant or cooperative agreement, and reasonable for the completion of project scope. FEMA recommends, therefore, that a non-Federal entity include a changes clause in its contract that describes how, if at all, changes can be made by either party to alter the method, price, or schedule of the work without breaching the contract. The language of the clause may differ depending on the nature of the contract and the end-item procured.

c. Access to Records.

All non-Federal entities must place into their contracts a provision that all contractors and their successors, transferees, assignees, and subcontractors acknowledge and agree to comply with applicable provisions governing Department and FEMA access to records, accounts, documents, information, facilities, and staff. See DHS Standard Terms and Conditions, v 3.0, ¶ XXVI (2013).

d. The following provides a contract clause regarding access to records:

“Access to Records. The following access to records requirements apply to this contract:

1. The contractor agrees to provide (insert name of state agency or local or Indian tribal government), (insert name of recipient), the FEMA Administrator, the Comptroller General of the United States, or any of their authorized representatives access to any books, documents, papers, and records of the Contractor which are directly pertinent to this contract for the purposes of making audits, examinations, excerpts, and transcriptions. (2) The Contractor agrees to permit any of the foregoing parties to reproduce by any means whatsoever or to copy excerpts and transcriptions as reasonably needed. (3) The contractor agrees to provide the FEMA Administrator or his authorized representative’s access to construction or other work sites pertaining to the work being completed under the contract.”

12. DHS Seal, Logo, and Flags.

a. All non-Federal entities must place in their contracts a provision that a contractor shall not use the DHS seal(s), logos, crests, or reproductions of flags or likenesses of DHS agency officials without specific FEMA pre-approval. See DHS Standard Terms and Conditions, v 3.0, ¶ XXV (2013).

b. The following provides a contract clause regarding DHS Seal, Logo, and Flags: “The contractor shall not use the DHS seal(s), logos, crests, or reproductions of flags or likenesses of DHS agency officials without specific FEMA pre- approval.”

13. Compliance with Federal Law, Regulations, and Executive Orders.

a. All non-Federal entities must place into their contracts an acknowledgement that FEMA financial assistance will be used to fund the contract along with the requirement that the contractor will comply with all applicable federal law, regulations, executive orders, and FEMA policies, procedures, and directives.

b. The following provides a contract clause regarding Compliance with Federal Law, Regulations, and Executive Orders: “This is an acknowledgement that FEMA financial assistance will be used to fund the contract only. The contractor will comply will all applicable federal law, regulations, executive orders, FEMA policies, procedures, and directives.”

14. No Obligation by Federal Government.

a. The non-Federal entity must include a provision in its contract that states that the Federal Government is not a party to the contract and is not subject to any obligations or liabilities to the non-Federal entity, contractor, or any other party pertaining to any matter resulting from the contract.

b. The following provides a contract clause regarding no obligation by the Federal Government: “The Federal Government is not a party to this contract and is not subject to any obligations or liabilities to the non-Federal entity, contractor, or any other party pertaining to any matter resulting from the contract.”

15. Program Fraud and False or Fraudulent Statements or Related Acts.

a. The non-Federal entity must include a provision in its contract that the contractor acknowledges that 31 U.S.C. Chap. 38 (Administrative Remedies for False Claims and Statements) applies to its actions pertaining to the contract.

b. The following provides a contract clause regarding Fraud and False or Fraudulent or Related Acts: “The contractor acknowledges that 31 U.S.C. Chap. 38 (Administrative Remedies for False Claims and Statements) applies to the contractor’s actions pertaining to this contract.”

1. Municipios definidos por la legislación y reglamentación aplicable como aquellos con menos de 50,000 habitantes. [↑](#footnote-ref-1)
2. Municipios definidos por la legislación y reglamentación aplicable como aquellos con más de 50,000 habitantes. [↑](#footnote-ref-2)
3. En conformidad con la reglamentación mencionada, se consideran costos razonables: (1) aquellos que no exceden los que incurriría una persona prudente y razonable; (2) son generalmente costos ordinarios y necesarios; (3) son costos reconocidos por las buenas prácticas de negocios y donde la negociación es sincera y libre de conflictos; (4) son costos a precio de mercado para bienes y servicios similares. [↑](#footnote-ref-3)